Ajuntament d'Inca

Expedient núm.: 4439/2026
Procediment: Concurs oposició per torn lliure per a cobrir una plaça vacant de TAE de Control Intern, personal funcionari de carrera (grup A1)

Fecha: 09/11/2026

PRIMER EJERCICIO. CUESTIONARIO TIPO TEST (20 puntos máximo)

De carácter obligatorio y eliminatorio.

Consistirá a responder por escrito un cuestionario tipo test de 100 preguntas más 5 preguntas de reserva con cuatro respuestas alternativas, de las cuales solo una es correcta, referidas al temario que figura como anexo I. Las persones aspirantes marcarán las contestaciones en las correspondientes hojas de examen.

Este ejercicio se calificará de 0 a 20 puntos, y serán eliminados aquellos aspirantes que no obtengan la puntuación mínima de 10 puntos.

El criterio de corrección será el siguiente: cada pregunta respondida correctamente se valorará con **0,20 puntos**; las preguntas no resueltas, tanto si figuran las cuatro opciones en blanco como si figuran con más de una respuesta, no se valorarán. Las preguntas con respuesta errónea se penalizarán con un cuarto del valor asignado a la respuesta correcta **(-0,05 puntos).**

En caso de que el tribunal acuerde la anulación de alguna o algunas de las preguntas, por haber detectado de oficio algún error manifiesto durante la realización del ejercicio o porque este se detecta como consecuencia de las alegaciones que posteriormente se presenten, se tendran en consideración las preguntas de reserva. Estas se escogerán según la orden de prelación en que se encuentren en el propio ejercicio.

Si una vez llevada a cabo la operación anterior el tribunal acuerda anular alguna pregunta más, el valor de cada pregunta se ajustará para que la puntuación máxima sea de 20 puntos.

El tiempo para desarrollar este ejercicio será de **70 minutos**.

EXAMEN

1. En el marco de la constitucionalización de la estabilidad presupuestaria, qué afirmación es correcta respecto a la autorización para emitir deuda pública o contraer crédito?

a) El Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales necesitan siempre una autorización previa de las Cortes Generales para emitir deuda pública.

b) El Estado y las comunidades autónomas tienen que estar autorizadas por ley para emitir deuda pública o contraer crédito; además, los créditos destinados a satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública se entienden siempre incluidos en el estado de gastos y su pago disfruta de prioridad absoluta.
c) La autorización legal para contraer crédito solo es exigible en las comunidades autónomas, mientras que el Estado puede endeudarse libremente en virtud de su soberanía financiera.
d) Los créditos destinados al pago de los intereses y del capital de la deuda pública tienen prioridad absoluta únicamente cuando existe superávit presupuestario.

2. De acuerdo con el artículo 103.1 de la Constitución española, cuál de las afirmaciones siguientes define correctamente los principios que deben regir la actuación de las administraciones públicas?

a) Las administraciones públicas sirven los intereses generales con objetividad y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sumisión llena a la ley y al derecho.
b) Las administraciones públicas sirven los intereses generales con objetividad y actúan de acuerdo con los principios de eficiencia, autonomía, subsidiariedad, desconcentración y cooperación, con sumisión preferente al interés público.
c) Las administraciones públicas sirven los intereses generales con objetividad y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, centralización, desconcentración y coordinación, con sumisión llena a la ley y al reglamento.
d) Las administraciones públicas sirven los intereses generales con objetividad y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, autonomía y cooperación, con sumisión a la ley siempre que no se oponga a criterios de oportunidad administrativa.

3. De acuerdo con el artículo 147 de la Constitución española, los Estatutos de Autonomía tienen la consideración de norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma. En relación con su naturaleza jurídica y su contenido, indicáis qué afirmación es correcta:

a) Los Estatutos de Autonomía son normas reglamentarias aprobadas por los parlamentos autonómicos, que adquieren eficacia jurídica después de su publicación en el boletín oficial de la Comunidad Autónoma.
b) Los Estatutos de Autonomía son normas institucionales básicas que forman parte del ordenamiento jurídico estatal, tienen que respetar la Constitución y tienen que contener, entre otras determinaciones, la denominación de la Comunidad, la delimitación del territorio, la denominación, organización y sede de las instituciones propias y las competencias asumidas.

c) Los Estatutos de Autonomía son leyes ordinarias estatales que pueden modificarse mediante una ley autonómica siempre que esta haya sido aprobada por mayoría absoluta del parlamento correspondiente.
d) Los Estatutos de Autonomía constituyen normas de rango constitucional dentro del territorio de cada Comunidad Autónoma y, por lo tanto, pueden establecer excepciones en las disposiciones constitucionales relativas al reparto competencial.

4. Un Ayuntamiento se plantea desarrollar una actividad pública que no está comprendida dentro de sus competencias propias ni ha estado objeto de delegación por parte de otra administración. De acuerdo con el artículo 7.4 de la Ley 7/1985, qué requisitos generales tiene que cumplir para poder ejercer esta actividad?

a) Únicamente tiene que obtener la autorización previa de la Administración autonómica competente, sin que sea necesario valorar la existencia de duplicidades o la sostenibilidad financiera de la actividad.
b) Tiene que obtener los informes previos y vinculantes de la Administración competente por razón de la materia, relativos a la inexistencia de duplicidades, y de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera, relativo a la sostenibilidad financiera de las nuevas competencias.
c) Tiene que obtener la autorización del Tribunal de Cuentas y de la Intervención General de la Administración del Estado, con independencia de qué sea la Administración competente por razón de la materia.
d) Puede ejercer la actividad libremente siempre que no comporte un incremento del gasto público y que exista consignación presupuestaria suficiente.

5. Una administración pública de un estado miembro tiene que aplicar una disposición de derecho nacional que resulta incompatible con una disposición de derecho de la Unión Europea directamente aplicable y pertinente para resolver un determinado asunto. De acuerdo con el principio de primacía del derecho de la Unión Europea, qué actuación corresponde adoptar?

a) Aplicar necesariamente la norma nacional, puesto que el principio de primacía solo opera ante las normas reglamentarias y no ante las disposiciones con rango de ley.
b) Aplicar la disposición nacional mientras no haya sido formalmente derogada por el legislador estatal.
c) Dejar inaplicada la disposición nacional incompatible en el caso concreto, sin necesidad de esperar la derogación o declaración de invalidez, dentro del ámbito de aplicación del derecho de la Unión.
d) Solicitar obligatoriamente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que declare la nulidad de la norma nacional antes de resolver el asunto.

6. En el ejercicio de las funciones de control interno de una entidad del sector público local, el órgano interventor examina un expediente relativo al otorgamiento de una subvención en régimen de concurrencia competitiva. La normativa reguladora atribuye al órgano concedente un margen de valoración técnica respecto de determinados criterios de evaluación, pero exige respetar las bases reguladoras, los principios de igualdad y objetividad y la obligación de motivar la resolución. Durante la fiscalización se observa que la puntuación otorgada a uno de los solicitantes no está suficientemente justificada y que se han aplicado criterios diferentes de los establecidos a las bases.
Qué actuación resulta más adecuada desde la perspectiva de los principios de legalidad y control de la actividad administrativa?

a) Considerar que la valoración técnica queda amparada por la discrecionalidad administrativa y, por lo tanto, excluir cualquier observación de control sobre los criterios utilizados por el órgano concedente.
b) Sustituir directamente la puntuación otorgada por el órgano concedente por la que el órgano interventor considere más ajustada a los méritos acreditados, dado que el control interno comporta la revisión llena de las decisiones discrecionales.
c) Examinar el cumplimiento de las bases reguladoras, la igualdad de trato, la objetividad, la motivación y la justificación de las valoraciones efectuadas, poniendo de manifiesto las irregularidades detectadas de acuerdo con el régimen jurídico aplicable, sin sustituir el órgano concedente en las valoraciones técnicas que le corresponden legalmente.
d) Limitar el control a comprobar la existencia de crédito presupuestario adecuado y suficiente, dado que las cuestiones relativas a la valoración de los solicitantes son ajenas a cualquier control de legalidad.

7. En el funcionamiento de un órgano colegiado, el secretario tiene atribuidas funciones esenciales para garantizar la regularidad formal y jurídica de las sesiones y de los acuerdos adoptados. De acuerdo con el artículo 16 de la Ley 40/2015, cuál de las afirmaciones siguientes es correcta?

a) El secretario tiene que ser necesariamente uno de los miembros del órgano colegiado y participa en las votaciones con derecho a voto.
b) El secretario solo puede ejercer funciones de carácter material, como por ejemplo redactar las actas, sin que pueda efectuar advertencias sobre la legalidad de los acuerdos que se pretendan adoptar.
c) El secretario es siempre un órgano administrativo unipersonal independiente, con competencia propia para revisar y anular los acuerdos adoptados por el colegiado.
d) El secretario puede ser un miembro del órgano colegiado o una persona al servicio de la Administración pública correspondiente. En este último caso, asiste a las reuniones con voz, pero sin voto, y le corresponden, entre otras funciones, velar

por la legalidad formal y material de las actuaciones, certificar las actuaciones del órgano y garantizar que los procedimientos y las reglas de constitución y adopción de acuerdos sean respetados.

8. Un órgano superior de una Administración pública dicta una instrucción dirigida a los órganos jerárquicamente dependientes con el fin de unificar los criterios de actuación en la tramitación de determinados expedientes administrativos. Uno de los órganos destinatarios incumple esta instrucción y dicta una resolución contraria a los criterios establecidos. De acuerdo con el artículo 6 de la Ley 40/2015, cuál es la consecuencia jurídica correcta?

a) El incumplimiento de la instrucción determina automáticamente la nulidad de pleno derecho de todos los actos dictados por el órgano dependiente, con independencia de su contenido y de la normativa aplicable.
b) Las instrucciones y las órdenes de servicio constituyen disposiciones reglamentarias y, por lo tanto, tienen la misma eficacia normativa que las normas aprobadas por los órganos competentes.
c) El incumplimiento de las instrucciones o órdenes de servicio no afecta por sí mismo la validez de los actos dictados, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en que pueda incurrir la persona responsable.
d) Las instrucciones y las órdenes de servicio solo pueden ser dictadas por los órganos que tengan atribuida la potestad reglamentaria y únicamente pueden dirigirse a órganos de rango inmediatamente inferior.

9. De acuerdo con el artículo 149.1.18.a de la Constitución, cuál de las materias siguientes corresponde a la competencia estatal?

a) La regulación íntegra y exclusiva de todos los aspectos de la función pública de las comunidades autónomas, sin margen para la legislación autonómica.
b) La legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas, la legislación sobre expropiación forzosa y el sistema de responsabilidad de todas las administraciones públicas.
c) La regulación exclusiva de la organización municipal y provincial, incluyendo cualquier aspecto de la autonomía organizativa local.
d) La regulación de todos los tributos propios de las comunidades autónomas y de las entidades locales, con exclusión de cualquier competencia normativa autonómica.

10. De acuerdo con el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, cuál es el procedimiento ordinario de aprobación de las ordenanzas locales?

a) Aprobación inicial por la alcaldía; información pública durante un plazo mínimo de quince días; resolución de las reclamaciones por la junta de gobierno local y aprobación definitiva por el pleno.
b) Aprobación inicial por el pleno; información pública y audiencia a los interesados durante un plazo mínimo de treinta días; resolución de las reclamaciones y sugerencias presentadas y aprobación definitiva por el pleno.
c) Aprobación inicial por la junta de gobierno local; información pública durante un plazo de treinta días; dictamen preceptivo de la comisión informativa y ratificación definitiva por la alcaldía.
d) Aprobación inicial por el pleno; audiencia a los interesados durante un plazo mínimo de veinte días; resolución de las reclamaciones por la alcaldía y aprobación definitiva por la junta de gobierno local.

11. Una persona tiene la condición de interesada en un procedimiento administrativo tramitado por una entidad local. En ejercicio de sus derechos, solicita conocer el estado de tramitación del expediente, identificar el órgano competente para instruirlo y resolverlo y obtener copia de los documentos que constan. De acuerdo con el artículo 53 de la Ley 39/2015, cuál de las afirmaciones siguientes es correcta?

a) El interesado solo puede acceder a esta información una vez finalizado el procedimiento y dictada la resolución definitiva.
b) El interesado tiene derecho a conocer el estado de tramitación, el sentido del silencio administrativo que corresponda, el órgano competente para la instrucción y la resolución, los actos de trámite dictados y a acceder a los documentos del expediente y obtener copia.
c) El derecho de acceso al expediente únicamente comprende los documentos aportados por la misma persona interesada, pero no los informes ni los otros documentos incorporados por la Administración.
d) El acceso al expediente administrativo solo se puede ejercer mediante una solicitud formal de transparencia, de acuerdo con la Ley 19/2013, y no constituye un derecho específico de las personas interesadas en el procedimiento.

12. Una persona solicita acceso a un expediente administrativo que contiene información relativa a la salud, la afiliación sindical y las convicciones religiosas de una persona física identificada. Qué tratamiento establece el artículo 23 de la Ley 19/2014 respecto de este tipo de información?

a) El acceso se tiene que conceder siempre que la persona solicitando acredite un interés legítimo relacionado con la actividad administrativa.
b) El acceso queda sujeto exclusivamente a una ponderación entre el interés público y el derecho a la intimidad, sin ninguna regla específica.
c) El acceso a estos datos está sometido a un régimen especialmente restrictivo y,

como regla general, solo se puede autorizar con el consentimiento expreso y escrito de la persona afectada o en los supuestos legalmente previstos.
d) El acceso se tiene que conceder cuando los datos figuren en un documento administrativo que haya sido incorporado a un expediente concluido.

13. De acuerdo con el artículo 36 de la Ley 39/2015, de procedimiento administrativo común, indicáis qué afirmación es correcta respecto de la forma de los actos administrativos:

a) Los actos administrativos se tienen que producir necesariamente por escrito y en apoyo electrónico, sin que sea admisible ninguna excepción derivada de la naturaleza de la actuación administrativa.
b) Los actos administrativos se producen por escrito a través de medios electrónicos, salvo que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia.
c) El ejercicio verbal de las competencias administrativas está prohibido, excepto cuando exista una habilitación legal exprés para cada actuación concreta.
d) Cuando un órgano administrativo ejerce su competencia verbalmente, la constancia escrita del acto corresponde exclusivamente a la persona interesada, que tiene que solicitar la formalización.

14. En un procedimiento administrativo de naturaleza económica, la Administración intenta notificar una resolución a una persona interesada, pero no consigue practicar la notificación. Una vez acreditada esta circunstancia en el expediente, qué actuación prevé el artículo 44 de la Ley 39/2015?

a) Publicar obligatoriamente el anuncio en el boletín oficial de la provincia correspondiente, sin necesidad de jefa otra publicación.
b) Publicar el anuncio exclusivamente en el tablón de edictos del ayuntamiento del último domicilio conocido de la persona interesada.
c) Publicar el anuncio en el Boletín Oficial del Estado, sin perjuicio que, con carácter previo y facultativo, se pueda publicar también en el boletín oficial de la comunidad autónoma o de la provincia, al tablón de edictos del ayuntamiento del último domicilio conocido o al consulado o sección consular correspondiente.
d) Publicar el anuncio simultáneamente en el BOE, al boletín oficial de la comunidad autónoma, al boletín oficial de la provincia y al tablón de edictos municipal, puesto que todos estos medios tienen carácter obligatorio.

15. De acuerdo con el artículo 39.4 de la Ley 39/2015, qué obligación tienen los órganos administrativos respecto de las normas y los actos dictados por otros órganos de las administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias?

a) Solo les tienen que observar cuando exista una relación de dependencia jerárquica entre el órgano que les ha dictado y el órgano que les tiene que aplicar.

b) Les tienen que observar únicamente cuando hayan sido dictados por órganos de la misma Administración pública y dentro del mismo ámbito territorial.
c) Les tienen que observar siempre que hayan sido dictados en el ejercicio de competencias propias, aunque los órganos no dependan jerárquicamente entre sí o pertenezcan a administraciones públicas diferentes.
d) Les pueden dejar de aplicar libremente cuando consideren que su contenido es contrario al ordenamiento jurídico, sin necesidad de utilizar ningún mecanismo de cooperación o impugnación.

16. El artículo 100 de la Ley 39/2015 regula los medios de ejecución forzosa. Cuál de las afirmaciones siguientes es correcta?

a) Los medios de ejecución forzosa son el constreñimiento sobre el patrimonio, la ejecución subsidiaria, la multa coercitiva y la compulsión sobre las personas; su utilización tiene que respetar el principio de proporcionalidad.
b) Los medios de ejecución forzosa son tajantes, pero la Administración puede emplear simultáneamente todos los que considere convenientes, sin necesidad de justificar la proporcionalidad.
c) La Administración tiene que utilizar siempre la compulsión sobre las personas con carácter preferente, porque es el medio que garantiza más directamente el cumplimiento de sus resoluciones.
d) El principio de proporcionalidad solo es exigible cuando la ejecución afecta derechos fundamentales, pero no cuando incide sobre el patrimonio de los obligados.

17. Un órgano administrativo resuelve un procedimiento fuera del plazo legalmente establecido. De acuerdo con el artículo 48.3 de la Ley 39/2015, qué afirmación es correcta?

a) La resolución es siempre nula de pleno derecho, independientemente de la naturaleza del plazo.
b) La resolución solo será anulable cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo.
c) La resolución es automáticamente anulable si el plazo es de carácter obligatorio, aunque su naturaleza no determine esta consecuencia.
d) La resolución es siempre válida, puesto que el incumplimiento de los plazos administrativos nunca afecta la validez de los actos.

18. De acuerdo con el artículo 31 de la Ley 39/2015, qué regla se aplica a la presentación de documentos en el registro electrónico durante un día inhábil?

a) El documento se considera presentado el primer día hábil siguiente, en la hora en que se haya producido efectivamente la presentación.

b) El documento se considera presentado en la primera hora del primer día hábil siguiente, salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil; a efectos del cumplimiento de los plazos por parte de los interesados, la presentación se considera efectuada en la fecha y hora en que se ha producido.
c) El documento se considera presentado el primer día hábil siguiente a las 9.00 horas, independientemente de la hora efectiva de presentación.
d) El documento se considera no presentado, puesto que los registros electrónicos solo pueden recibir documentos durante los días hábiles.

19. En cuanto a la enmienda de las solicitudes, de acuerdo con el artículo 68 de la Ley 39/2015, cuál es el plazo general que se tiene que conceder a la persona interesada para reparar la falta o aportar los documentos preceptivos?

a) Cinco días hábiles, sin posibilidad de ampliación.
b) Diez días, con la advertencia que, si no enmienda, se la tendrá por cejada en su petición, con la resolución previa correspondiente.
c) Quince días naturales, transcurridos los cuales la Administración tiene que archivar automáticamente la solicitud.
d) Un mes, salvo que las bases reguladoras del procedimiento establezcan un plazo inferior.

20. Cuál de las circunstancias siguientes impide la adopción de una medida provisional, de acuerdo con el artículo 56.4 de la Ley 39/2015?

a) Que la medida sea temporal y susceptible de revisión durante la tramitación del procedimiento.
b) Que la medida tenga por finalidad asegurar la eficacia de la resolución que se pueda dictar.
c) Que la medida pueda causar perjuicios de reparación difícil o imposible a las personas interesadas o que implique una violación de derechos amparados por las leyes.
d) Que la medida sea adoptada de oficio por el órgano competente.

21. Según el artículo 82.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando forme parte del procedimiento el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la comunidad autónoma, la audiencia a los interesados deberá realizarse:
a) Después de solicitar el dictamen y antes de su emisión.
b) Después de emitirse el dictamen y antes de redactar la propuesta de resolución.
c) Antes de solicitar el dictamen, salvo que se haya acordado la tramitación de urgencia del procedimiento.
d) Antes de solicitar el dictamen.

22. De acuerdo con el artículo 71.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el despacho de los expedientes se guardará el orden riguroso de incoación en asuntos de homogénea naturaleza, salvo que:

a) Por el órgano competente para resolver se dé orden motivada en contrario, de la que quede constancia.
b) Por el titular de la unidad administrativa se dé orden motivada en contrario, de la que quede constancia.
c) Por el titular de la unidad administrativa se dé orden en contrario, que solo deberá ser motivada cuando limite derechos subjetivos o intereses legítimos.
d) Por el órgano competente para resolver se aprecien razones de interés público, sin necesidad de dejar constancia de la alteración del orden.

23. Según el artículo 21.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿cuál de los siguientes supuestos se exceptúa de la obligación de dictar resolución expresa y notificarla?

a) Los supuestos de desistimiento de la solicitud aceptado por la Administración.
b) Los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio.
c) Los supuestos de desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento.
d) Los supuestos de renuncia del derecho en que se funde la solicitud.

24. De acuerdo con el artículo 95.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿qué efectos tiene la caducidad del procedimiento sobre la prescripción?

a) La caducidad permite iniciar un nuevo procedimiento mientras no hayan prescrito las acciones, manteniéndose la interrupción del plazo de prescripción producida por las actuaciones del procedimiento caducado.
b) La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción.
c) La caducidad determina que el plazo de prescripción quede suspendido durante la tramitación del procedimiento y se reanude, por el tiempo restante, desde la notificación de su declaración.
d) La incorporación de actuaciones del procedimiento caducado a uno nuevo permite conservar la interrupción del plazo de prescripción desde la fecha en que se practicaron en el procedimiento anterior.

25. Según el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas las Administraciones Públicas podrán rectificar los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos:

a) En cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, siempre que el acto no haya adquirido firmeza en vía administrativa.
b) En cualquier momento, de oficio cuando se trate de actos desfavorables y únicamente a instancia de los interesados cuando se trate de actos favorables.
c) En cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, salvo que haya transcurrido el plazo de prescripción del derecho reconocido en el acto.
d) En cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados.

26. Según el artículo 117.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas ¿qué efecto tiene la interposición de un recurso administrativo sobre la ejecución del acto impugnado?

a) Suspende su ejecución cuando el acto imponga una obligación de contenido económico.
b) La interposición de cualquier recurso, excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado.
c) Suspende su ejecución durante el plazo del que dispone la Administración para resolver y notificar el recurso.
d) Suspende su ejecución cuando el recurrente alegue alguno de los motivos de nulidad de pleno derecho.

27. Según el artículo 19.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa:

a) La Administración autora de un acto está legitimada para impugnarlo ante este orden jurisdiccional, siempre que haya interpuesto previamente recurso de reposición contra dicho acto.
b) La Administración autora de un acto está legitimada para impugnarlo ante este orden jurisdiccional, previa autorización del órgano judicial competente para conocer del recurso.
c) La Administración autora de un acto está legitimada para impugnarlo ante este orden jurisdiccional, previa su declaración de lesividad para el interés público en los términos establecidos por la Ley.
d) La Administración autora de un acto carece de legitimación para impugnarlo ante este orden jurisdiccional, correspondiendo su impugnación exclusivamente a los titulares de derechos o intereses legítimos afectados.

28. Según el artículo 85.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la efectividad de las reducciones por reconocimiento de responsabilidad y pago voluntario, cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, estará condicionada:

a) Al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa o contencioso-administrativa contra la sanción.
b) A la renuncia a formular alegaciones, sin que ello impida interponer posteriormente recursos administrativos contra la sanción.
c) Al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción.
d) A que la sanción haya adquirido firmeza en vía administrativa antes de realizarse el pago voluntario.

29. Según el artículo 129.7 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando la iniciativa normativa afecte a los gastos o ingresos públicos presentes o futuros:

a) Bastará acreditar la existencia de financiación suficiente en el presupuesto vigente, pudiendo sustituirse por esta justificación la cuantificación y valoración de sus repercusiones y efectos.
b) Se deberán cuantificar y valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse al cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
c) Se deberán cuantificar y valorar sus repercusiones y efectos en el ejercicio de aprobación, quedando diferida la valoración de los efectos futuros a la evaluación de la norma.
d) Se deberán cuantificar y valorar sus repercusiones y efectos cuando suponga un incremento del gasto público, pudiendo omitirse esta valoración si únicamente implica una disminución de ingresos.

30. Según el artículo 36.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, cuando la Administración haya indemnizado a los lesionados, exigirá de sus autoridades y demás personal a su servicio:

a) La responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves, sin necesidad de instruir un procedimiento cuando los hechos hayan quedado acreditados en el expediente de responsabilidad patrimonial.
b) La responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves, previa instrucción del correspondiente procedimiento.

c) La responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves, previa instrucción del correspondiente procedimiento y siempre que los lesionados soliciten el ejercicio de esta acción.
d) La responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia, cualquiera que sea su gravedad, previa instrucción del correspondiente procedimiento.

31. Según el artículo 9.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, los contratos de arrendamiento sobre bienes inmuebles celebrados por un ayuntamiento:

a) Tendrán carácter administrativo cuando el inmueble se destine a un servicio público y se regirán por la legislación de contratos del sector público.
b) Tendrán carácter privado y se regirán por la LCSP en su preparación y adjudicación, y por el derecho privado en sus efectos y extinción.
c) Tendrán siempre el carácter de contratos privados y se regirán por la legislación patrimonial.
d) Tendrán carácter administrativo o privado según la finalidad del arrendamiento y se regirán por la legislación patrimonial con carácter supletorio.

32. En relación con el carácter formal de la contratación del sector público, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta según el artículo 37.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público?

a) Las entidades del sector público no podrán contratar verbalmente, salvo que se trate de un contrato menor cuya realización quede acreditada mediante la factura y la conformidad del servicio gestor.
b) Las entidades del sector público no podrán contratar verbalmente, salvo que el expediente se declare de tramitación urgente por responder a una necesidad inaplazable o resultar preciso acelerar su adjudicación por razones de interés público.
c) Las entidades del sector público no podrán contratar verbalmente, salvo que el contrato tenga, conforme a lo señalado en el artículo 120.1, carácter de emergencia.
d) Las entidades del sector público no podrán contratar verbalmente, salvo que exista crédito adecuado y suficiente y el órgano de contratación se comprometa a formalizar el contrato antes de reconocer la obligación.

33. Según el artículo 39.2.b) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, los contratos celebrados por poderes adjudicadores en los que concurra carencia o insuficiencia de crédito, de conformidad con las normas presupuestarias aplicables y salvo los supuestos de emergencia, serán:

a) Anulables, pudiendo convalidarse mediante la aprobación posterior de la correspondiente modificación presupuestaria.
b) Válidos, aunque no podrán ejecutarse hasta que se habilite el crédito necesario para atender las obligaciones.
c) Nulos de pleno derecho.
d) Nulos únicamente cuando el órgano interventor haya formulado previamente un reparo por insuficiencia de crédito.

34. Según la disposición adicional tercera.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la fiscalización del órgano interventor de la entidad local recaerá también sobre la valoración incorporada al expediente acerca de las repercusiones en la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de:

a) Los contratos que comprometan gastos de ejercicios futuros, quedando exceptuados aquellos cuya ejecución se complete en el ejercicio corriente.
b) Cada nuevo contrato, excepto los contratos menores.
c) Los contratos sujetos a regulación armonizada, quedando exceptuados los que no alcancen los umbrales correspondientes.
d) Cada nuevo contrato, excepto aquellos cuyo gasto esté íntegramente financiado mediante subvenciones de otras Administraciones públicas.

35. Según el artículo 116.5 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, si la financiación del contrato ha de realizarse con aportaciones de distinta procedencia, aunque se trate de órganos de una misma Administración pública:

a) Se tramitará un solo expediente por el órgano de contratación al que corresponda la adjudicación del contrato, debiendo acreditarse la plena disponibilidad de todas las aportaciones y determinarse el orden de su abono, sin que resulte exigible incluir una garantía para su efectividad.
b) Se tramitará un solo expediente por el órgano de contratación al que corresponda la adjudicación del contrato, debiendo acreditarse en aquel la plena disponibilidad de todas las aportaciones y determinarse el orden de su abono, con inclusión de una garantía para su efectividad.
c) Se tramitará un solo expediente, sin necesidad de acreditar la disponibilidad de las aportaciones de los demás órganos o Administraciones.
d) Se tramitará un solo expediente por el órgano de contratación al que corresponda la adjudicación del contrato, siendo suficiente incorporar los compromisos de aportación y acreditar su plena disponibilidad antes de formalizar el contrato.

36. Según la disposición adicional tercera.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, cuando una entidad local tramite anticipadamente un contrato cuya financiación dependa de una subvención solicitada a otra entidad, la adjudicación deberá someterse:

a) A la condición resolutoria de que se deniegue la subvención solicitada para financiar el contrato.
b) A la condición suspensiva de la efectiva consolidación de los recursos que han de financiar el contrato correspondiente.
c) A la condición suspensiva de que el contratista acepte aplazar el cobro hasta que se obtenga la subvención.
d) A la condición resolutoria de que la subvención no se haya ingresado al finalizar la ejecución del contrato.

37. Según el artículo 204.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, cuando la posibilidad de modificación esté expresamente prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares y se cumplan los requisitos establecidos en dicho artículo, los contratos de las Administraciones públicas podrán modificarse durante su vigencia:

a) Hasta un máximo del 10 por ciento del precio inicial.
b) Hasta un máximo del 20 por ciento del presupuesto base de licitación.
c) Hasta un máximo del 20 por ciento del precio inicial.
d) Hasta un máximo del 50 por ciento del precio inicial.

38. Según el artículo 240.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, los abonos de las certificaciones de obra tienen el concepto de:

a) Pagos definitivos por las unidades certificadas, sujetos únicamente a la corrección de errores materiales o aritméticos.
b) Pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden.
c) Pagos a cuenta que implican la recepción parcial de las unidades certificadas, sin perjuicio de las variaciones de la medición final.
d) Pagos definitivos respecto de las unidades certificadas y pagos provisionales respecto de los excesos de mediciones incluidos en ellas.

39. Según el artículo 270.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, ¿en cuál de los siguientes supuestos deberá restablecerse el equilibrio económico del contrato de concesión de obras?

a) Cuando la demanda real sea inferior a la prevista en el estudio elaborado por la Administración y disminuyan los ingresos del concesionario.
b) Cuando actuaciones de la Administración Pública concedente, por su carácter obligatorio para el concesionario determinaran de forma directa la ruptura sustancial de la economía del contrato.
c) Cuando los costes de financiación del concesionario superen los previstos en su oferta como consecuencia de las condiciones del mercado.
d) Cuando los beneficios obtenidos por el concesionario sean inferiores a los previstos, aunque se mantengan las condiciones de explotación del contrato.

40. Según el artículo 141 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, ¿qué deben respetar las multas por infracción de ordenanzas locales?

a) Las cuantías que establezcan las ordenanzas locales, aunque superen los límites legales, cuando lo justifique la gravedad de las infracciones.
b) Las cuantías establecidas en dicho artículo, salvo previsión legal distinta.
c) Las cuantías que determine el Pleno de la entidad local mediante acuerdo motivado adoptado por mayoría absoluta.
d) Las cuantías establecidas en dicho artículo, excepto en caso de reincidencia, cuando esta circunstancia esté prevista en la ordenanza correspondiente.

41. Según el artículo 301.1 de la Ley 9/2017, de contratos del sector público, de qué suministros tiene derecho el adjudicatario a percibir el precio?

a) De los efectivamente librados y formalmente recibidos por la Administración de acuerdo con las condiciones establecidas en el contrato.
b) De los facturados, puesto que la presentación de la factura es suficiente para tener derecho al abono.
c) De los ademanes a disposición de la Administración a las instalaciones del contratista, aunque no se hayan librado.
d) De los librados y formalmente recibidos, pero solo cuando haya finalizado el plazo de garantía.

42. Según el artículo 311.3 de la Ley 9/2017, de contratos del sector público, qué puede hacer la Administración si los trabajos de un contrato de servicios no se adecúan a la prestación contratada por vicios o defectos imputables al contratista?

a) Rechazar la prestación, pero abonar el precio si los trabajos se han librado dentro del plazo contractual.
b) Rechazar la prestación y recuperar el precio satisfecho únicamente si el pliegue prevé expresamente esta posibilidad.

c) Rechazar la prestación, pero limitar la recuperación del precio satisfecho al importe de la garantía definitiva.
d) Rechazar la prestación y quedar exenta de la obligación de pago o tener derecho, si procede, a recuperar el precio satisfecho.

43. Según el artículo 85.2.A de la Ley 7/1985, qué tiene que acreditar la memoria justificativa para poder gestionar un servicio público local mediante una entidad pública empresarial local o una sociedad mercantil local de capital íntegramente público?
a) Que la forma escogida es más sostenible y eficiente que la gestión mediante una concesión de servicios.
b) Que la forma escogida es más sostenible y eficiente que la gestión por la misma entidad local y que la gestión mediante un organismo autónomo local.
c) Que la forma escogida es más eficiente que la gestión por la misma entidad local y que la gestión mediante un organismo autónomo local, con una sostenibilidad equivalente.
d) Que la forma escogida es financieramente sostenible y permite recuperar la inversión, sin necesidad de compararla con otras formas de gestión.

44. Según el artículo 86.1 de la Ley 7/1985, qué tiene que justificar el expediente de iniciativa económica local y qué análisis tiene que incluir?

a) Tiene que justificar que la actividad se puede financiar con sus ingresos y tiene que incluir un análisis de mercado.
b) Tiene que justificar que la iniciativa no genera riesgo para la sostenibilidad financiera del conjunto de la hacienda municipal y tiene que incluir un análisis de mercado.
c) Tiene que justificar que la actividad generará beneficios desde el primer ejercicio y tiene que incluir un análisis de mercado.
d) Tiene que justificar que la iniciativa no aumenta el endeudamiento municipal y tiene que incluir un análisis de los costes de la actividad.

45. Cómo distribuye la Constitución española la potestad de establecer tributos entre el Estado, las comunidades autónomas y las corporaciones locales?

a) El Estado y las comunidades autónomas tienen potestad tributaria originaria. Las corporaciones locales solo pueden exigir tributos.
b) El Estado tiene potestad tributaria originaria. Las comunidades autónomas y las corporaciones locales solo pueden exigir tributos estatales.
c) La potestad originaria corresponde en el Estado intermediando una ley. Las comunidades autónomas y las corporaciones locales pueden establecer y exigir tributos de acuerdo con la Constitución y las leyes.

d) El Estado, las comunidades autónomas y las corporaciones locales tienen potestad tributaria originaria dentro de su ámbito territorial.

46. De acuerdo con la Ley 37/1992, qué tratamiento tiene, a efectos del IVA, el servicio de abastecimiento de agua potable que un ayuntamiento presta directamente a los usuarios a cambio de una tasa?

a) No está sujeto al IVA porque la contraprestación tiene naturaleza tributaria.
b) Está sujeto al IVA, pero está exento porque es un servicio municipal obligatorio.
c) Está sujeto al IVA aunque la contraprestación sea una tasa.
d) Solo está sujeto al IVA si el servicio se presta mediante una empresa concesionaria.

47. A qué tipo de gasto destina la Constitución los recursos del Fondo de Compensación para corregir los desequilibrios económicos interterritoriales?

a) A gastos corrientes de los servicios públicos fundamentales.
b) A gastos financieros de la deuda autonómica.
c) A cualquier gasto previsto en el presupuesto autonómico.
d) A gastos de inversión.

48. De qué recursos se tienen que nutrir fundamentalmente las haciendas locales, según el artículo 142 de la Constitución española?

a) De los tributos propios y de la participación en los tributos del Estado y de las diputaciones provinciales.
b) De los tributos propios y de la participación en los tributos del Estado y de las comunidades autónomas.
c) De los tributos propios y de la participación exclusivamente en los tributos de las comunidades autónomas.
d) De los tributos propios y de la participación exclusivamente en los tributos del Estado.

49. Según el artículo 5.2 de la Ley 47/2003, general presupuestaria, qué afirmación es correcta sobre los derechos de la Hacienda Pública estatal?

a) Son de naturaleza pública los tributos y los otros derechos de contenido económico que derivan del ejercicio de potestades administrativas.
b) Los derechos no tributarios tienen naturaleza privada, aunque deriven del ejercicio de potestades administrativas.
c) Todos los derechos tienen naturaleza pública porque su titularidad corresponde a la Administración General del Estado o a sus organismos autónomos.

d) Los derechos tienen naturaleza pública cuando el deudor es una administración pública y naturaleza privada cuando el deudor es un particular.

50. De acuerdo con el artículo 134.7 de la Constitución española, qué afirmación es correcta sobre la creación y modificación de tributos mediante la Ley de presupuestos generales del Estado?

a) Puede crear y modificar tributos cuando una ley tributaria sustantiva lo prevea.
b) No puede crear tributos ni modificar los que ya existen.
c) Puede crear tributos, pero no puede modificar los que ya existen.
d) No puede crear tributos, pero puede modificarlos cuando una ley tributaria sustantiva lo prevea.

51. Qué criterios tienen que regir la programación y la ejecución del gasto público según el artículo 31.2 de la Constitución española?

a) Igualdad y progresividad.
b) Eficiencia y economía.
c) Generalitat y capacidad económica.
d) Eficiencia y progresividad.

52. Según el artículo 10.2 de la Ley general tributaria, a qué tributos sin periodo impositivo se aplica una norma tributaria nueva, si no se dispone el contrario?

a) A los que se meriten a partir de la publicación de la norma.
b) A los que se meriten a partir de la entrada en vigor de la norma.
c) A los que se liquiden a partir de la entrada en vigor de la norma.
d) A los que se paguen a partir de la entrada en vigor de la norma.

53. Dentro del régimen general de financiación local, a qué municipios se aplica el modelo de participación en los tributos del Estado que regula el artículo 122 del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales?

a) En los municipios que son capitales de provincia o de comunidad autónoma y tienen una población de derecho inferior a 75.000 habitantes.
b) En los municipios que no son capitales de provincia ni de comunidad autónoma y tienen una población de derecho igual o superior a 75.000 habitantes.
c) En los municipios que no son capitales de provincia ni de comunidad autónoma y tienen una población de derecho inferior a 75.000 habitantes.
d) En los municipios que son capitales de provincia o de comunidad autónoma y tienen una población de derecho igual o superior a 75.000 habitantes.

54. Qué modalidades de aumento del capital social prevé la Ley de sociedades de capital para una sociedad anónima?

a) Emitir nuevas acciones o aumentar el valor nominal de las existentes.
b) Emitir nuevas acciones o aumentar la prima de emisión de las existentes.
c) Aumentar el valor nominal de las acciones existentes o emitir obligaciones sin convertirlas en acciones.
d) Emitir obligaciones sin convertirlas en acciones o aumentar la prima de emisión de las acciones existentes.

55. Según el artículo 1 de la Ley de sociedades de capital, qué afirmación es correcta sobre la división del capital y la responsabilidad de los socios por las deudas sociales?

a) En la sociedad de responsabilidad limitada, el capital se divide en acciones y los socios no responden personalmente de las deudas sociales.
b) En la sociedad anónima, el capital se divide en acciones y al menos un socio responde personalmente de las deudas sociales.
c) En la sociedad comanditaria por acciones, el capital se divide en acciones y al menos un socio responde personalmente de las deudas sociales como socio colectivo.
d) En la sociedad comanditaria por acciones, el capital se divide en acciones y ningún socio responde personalmente de las deudas sociales.

56. Una subvención ha financiado la compra de maquinaria y el beneficiario ha presentado las facturas. Según el artículo 44.4 de la Ley 38/2003, qué afirmación describe correctamente el alcance del control financiero en este caso?

a) Se pueden examinar las facturas y los registros contables, pero la comprobación material de la inversión corresponde exclusivamente al órgano concedente.
b) Se puede comprobar materialmente la inversión solo si antes se han detectado irregularidades en la documentación justificativa.
c) Se pueden examinar los registros contables y la documentación de apoyo, y también comprobar materialmente la inversión financiada.
d) Se puede comprobar materialmente la inversión solo si la resolución de concesión lo prevé expresamente.

57. Según el artículo 3.1 de la Carta Europea de Autonomía Local, que se entiende por autonomía local?

a) El derecho y la capacidad efectiva de las entidades locales de ordenar y gestionar la totalidad de los asuntos públicos, en el marco de la ley, bajo su propia

responsabilidad y en beneficio de sus habitantes.
b) El derecho y la capacidad efectiva de las entidades locales de ordenar y gestionar una parte importante de los asuntos públicos, en el marco de la ley, bajo su propia responsabilidad y en beneficio de sus habitantes.
c) El derecho y la capacidad efectiva de las entidades locales de ordenar y gestionar una parte importante de los asuntos públicos, en el marco de la ley, bajo la responsabilidad de la administración autonómica y en beneficio de sus habitantes.
d) El derecho y la capacidad efectiva de las entidades locales de ordenar y gestionar una parte importante de los asuntos públicos, en el marco de la ley, bajo su propia responsabilidad y en beneficio de los intereses generales del Estado.

58. Según la Ley 7/1985, reguladora de las bases del régimen local, qué mayoría se requiere para aprobar o modificar el reglamento orgánico propio de la corporación?

a) Mayoría simple de los miembros presentes.
b) Mayoría absoluta de los miembros presentes.
c) Mayoría de dos tercios del número legal de miembros de la corporación.
d) Mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación.

59. Según el artículo 16.1 de la Ley 7/1985, reguladora de las bases del régimen local, de que constituyen prueba los datos del padrón municipal?

a) De la residencia legal en España y del domicilio habitual en el municipio.
b) De la residencia fiscal y del domicilio fiscal de las personas inscritas.
c) De la residencia en el municipio y de la titularidad de la vivienda donde se está empadronado.
d) De la residencia en el municipio y del domicilio habitual en este municipio.

60. Según el artículo 75.3 de la Ley 7/1985, qué regidores pueden percibir asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones del Pleno municipal?

a) Los que no tienen dedicación exclusiva ni dedicación parcial.
b) Los que tienen dedicación parcial, siempre que las sesiones se celebren fuera de su horario de dedicación.
c) Los que tienen dedicación exclusiva, si el Pleno lo autoriza expresamente.
d) Todos los regidores, independientemente de su régimen de dedicación, siempre que asistan efectivamente a las sesiones.

61. En relación con los bienes comunales de las entidades locales, señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:
a) Tienen la consideración de bienes patrimoniales y su aprovechamiento corresponde exclusivamente a la entidad local titular.

b) Son bienes de dominio público cuyo aprovechamiento corresponde al común de los vecinos.
c) Son bienes de dominio público cuyo aprovechamiento corresponde exclusivamente a los órganos de gobierno de la entidad local.
d) Son bienes patrimoniales que pueden ser enajenados libremente mediante acuerdo del Pleno.

62. De conformidad con el Estatuto Básico del Empleado Público, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre las relaciones de puestos de trabajo es correcta?

a) Constituyen un instrumento de ordenación presupuestaria que determina exclusivamente el número de plazas de cada Administración.
b) Su aprobación corresponde necesariamente al Pleno de la entidad local, sin posibilidad de delegación.
c) Comprenden, al menos, la denominación de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o escalas de adscripción, los sistemas de provisión y las retribuciones complementarias.
d) Comprenden, al menos, la denominación de las plazas, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o escalas de adscripción, los sistemas de provisión y las retribuciones complementarias.

63. En relación con los sistemas selectivos de acceso a la función pública, señale la respuesta correcta:

a) El concurso de méritos constituye el sistema ordinario de selección de los funcionarios de carrera.
b) La oposición y el concurso-oposición son los sistemas ordinarios de selección de los funcionarios de carrera, pudiendo utilizarse excepcionalmente el concurso en los términos establecidos legalmente.
c) La oposición, el concurso-oposición y la libre designación son los sistemas ordinarios de selección de los funcionarios de carrera, pudiendo utilizarse excepcionalmente el concurso en los términos establecidos legalmente.
d) La Administración puede establecer libremente sistemas selectivos distintos de los previstos en el Estatuto Básico del Empleado Público cuando lo justifiquen razones organizativas.

64. De acuerdo con el régimen retributivo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

a) Las retribuciones básicas de los funcionarios de carrera comprenden el sueldo y las pagas extraordinarias, mientras que los trienios tienen la consideración de retribuciones complementarias.

b) Las retribuciones básicas de los funcionarios de carrera comprenden el sueldo y las pagas extraordinarias y los trienios, y las gratificaciones tienen la consideración de retribuciones complementarias.
c) Las retribuciones básicas de los funcionarios de carrera comprenden el sueldo, las pagas extraordinarias y las gratificaciones tienen la consideración de retribuciones complementarias.
d) Las retribuciones complementarias pueden establecerse libremente por cada entidad local sin necesidad de respetar los límites establecidos legalmente.

65. De conformidad con el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, ¿cuál de las siguientes funciones corresponde a la subescala de Intervención-Tesorería?

a) La dirección de los servicios de gestión financiera de la Entidad Local.
b) Formar la Cuenta General.
c) El control y fiscalización interna y externa de la gestión económico-financiera y presupuestaria, así como la contabilidad, tesorería y recaudación.
d) La formación del presupuesto y de las ordenanzas fiscales.

66. De acuerdo con la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señale cuál de los siguientes sujetos está obligado a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas:

a) Las personas jurídicas.
b) Los notarios y registradores.
c) Las entidades sin personalidad jurídica, por ejemplo: los grupos políticos municipales.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

67. En el análisis de las políticas públicas, ¿qué caracteriza fundamentalmente a la fase de evaluación?

a) La identificación inicial de un problema público y su incorporación a la agenda política.
b) La selección de los instrumentos jurídicos y económicos que permitirán ejecutar la política pública.
c) El análisis de los resultados e impactos de la intervención pública, valorando su eficacia, eficiencia y adecuación a los objetivos perseguidos.
d) La asignación inicial de competencias entre las distintas Administraciones públicas implicadas.

68. En relación con la planificación estratégica y operativa en las Administraciones públicas, señale la respuesta correcta:

a) La planificación estratégica se limita a establecer objetivos anuales de carácter presupuestario.
b) La planificación operativa concreta los objetivos estratégicos en actuaciones, responsables, recursos, plazos e indicadores de seguimiento.
c) La planificación estratégica y la planificación operativa son instrumentos equivalentes y no presentan diferencias funcionales.
d) La planificación estratégica tiene carácter exclusivamente político y no puede incorporar indicadores de evaluación.

69. De conformidad con la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, ¿cuál es un elemento esencial que caracteriza al contrato de concesión de servicios frente al contrato de servicios?

a) La duración necesariamente superior a cinco años.
b) La obligación de que el concesionario sea una sociedad mercantil de capital íntegramente privado.
c) La transferencia al concesionario del riesgo operacional en la explotación del servicio.
d) La financiación íntegra del servicio mediante tarifas abonadas directamente por los usuarios.

70. En relación con la aprobación del presupuesto general de una entidad local, señale la respuesta correcta:

a) Una vez aprobado inicialmente por el Pleno, debe someterse a información pública durante quince días, durante los cuales los interesados pueden examinarlo y presentar reclamaciones.
b) La aprobación inicial corresponde al presidente de la corporación y la definitiva a la Intervención.
c) El presupuesto se considera definitivamente aprobado desde el momento de su aprobación inicial, sin necesidad de información pública.
b) La aprobación definitiva corresponde siempre al órgano autonómico competente en materia de tutela financiera.

71. Una entidad local necesita incrementar el crédito de una aplicación presupuestaria de gastos que resulta insuficiente y no ampliable, disponiendo de financiación procedente del remanente líquido de tesorería para gastos generales. ¿Qué modificación presupuestaria procede?

a) Una transferencia de crédito.
b) Una generación de crédito por ingresos.
c) Una ampliación de crédito.
d) Un suplemento de crédito.

72. En relación con las fases de ejecución del presupuesto de gastos de las entidades locales, señale la respuesta correcta:

a) La autorización de gasto es el acto administrativo inicial del procedimiento de ejecución del presupuesto público por el que la autoridad competente acuerda realizar un gasto determinado por una cuantía cierta y exacta, reservando el crédito presupuestario necesario.
b) La disposición o compromiso del gasto supone la realización de un acto con relevancia jurídica frente a terceros, vinculando a la entidad local a la realización de un gasto por una cuantía determinada o determinable.
c) El reconocimiento de la obligación puede realizarse con carácter general, previo a la acreditación documental de la prestación o del derecho del acreedor.
d) La ordenación del pago es el acto administrativo por el cual el Tesorero municipal expide una orden para materializar el abono de una obligación económica previamente reconocida y liquidada por la Administración.

73. A efectos del cálculo del resultado presupuestario de una entidad local, ¿qué tratamiento debe darse a las desviaciones de financiación?

a) Las desviaciones positivas de financiación se minoran y las negativas se adicionan al resultado presupuestario, a efectos de calcular el resultado presupuestario ajustado
b) Las desviaciones positivas de financiación se minoran y las negativas se adicionan al resultado presupuestario, a efectos de calcular el resultado presupuestario ajustado.
c) Las desviaciones de financiación únicamente se tienen en cuenta para calcular el remanente de tesorería, pero nunca el resultado presupuestario.
d) Las desviaciones de financiación no afectan al resultado presupuestario cuando los gastos están financiados con recursos afectados.

74. De conformidad con la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre la regla de gasto es correcta?

a) La regla de gasto establece que el gasto computable de las Administraciones públicas no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del PIB de medio plazo de la economía española, en los términos establecidos legalmente.
b) La regla de gasto establece que el gasto computable de las Administraciones públicas podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del PIB de medio plazo de la economía española, en los términos establecidos legalmente.
c) La regla de gasto establece un límite máximo al volumen de deuda viva de las entidades locales.

d) El incumplimiento de la regla de gasto determina automáticamente la nulidad de todos los acuerdos de aprobación de gastos adoptados durante el ejercicio.

75. En relación con el principio de unidad de caja y las funciones de la Tesorería de las entidades locales, señale la respuesta correcta:

a) El principio de unidad de caja obliga a mantener todos los fondos de la entidad local en una única cuenta bancaria, con independencia de su procedencia, respetando las disponibilidades líquidas y las obligaciones legalmente afectadas.
b) La Tesorería únicamente tiene atribuidas funciones de realización material de los pagos y cobros.
c) El principio de unidad de caja exige centralizar todos los fondos y valores generados por operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias, con independencia de su procedencia, respetando las disponibilidades líquidas y las obligaciones legalmente afectadas.
d) La Tesorería puede alterar libremente la prelación legal de pagos cuando existan razones de oportunidad o conveniencia administrativa.

76. El Presidente de cada Comisión Informativa podrá requerir la presencia, en sus sesiones, de personal o miembros de la Corporación a efectos informativos. A las sesiones de la Comisión de Hacienda asistirá, en todo caso:
a) El funcionario responsable de la Intervención.
b) El funcionario responsable de la Secretaria.
c) El funcionario responsable de la Tesorería.
d) El funcionario responsable de Gestión Tributaria.

77. Las Entidades Locales solo podrán ejercer competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal, de acuerdo con los requerimientos de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra Administración Pública.

a) A estos efectos, serán potestativos y no vinculantes los informes previos de la Administración competente por razón de materia, en el que se señale la inexistencia de duplicidades, y de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera sobre la sostenibilidad financiera de las nuevas competencias
b) A estos efectos, serán necesarios y vinculantes los informes previos de la Administración competente por razón de materia, en el que se señale la inexistencia de duplicidades, y de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera sobre la sostenibilidad financiera de las nuevas competencias.
c) A estos efectos, serán potestativos y vinculantes los informes previos de la Administración competente por razón de materia, en el que se señale la inexistencia de duplicidades, y de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera sobre la sostenibilidad financiera de las nuevas competencias.
d) A estos efectos, serán necesarios y no vinculantes los informes previos de la

Administración competente por razón de materia, en el que se señale la inexistencia de duplicidades, y de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera sobre la sostenibilidad financiera de las nuevas competencias.

78. En el caso de que el Ayuntamiento de Inca quisiera constituir un Consorcio con la Comunidad Autónoma para la cooperación en fines que le son comunes, lo podría constituir cuando:

a) No se haya podido formalizar a través de un convenio.
b) No se haya podido formalizar a través de un convenio y no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera de la Entidad Local de que se trate, que no podrá aportar más recursos que los finalmente previstos.
c) No se haya podido formalizar a través de un convenio y no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera de la Entidad de que se trate y del propio consorcio, que no podrá demandar más recursos que los inicialmente previstos.
d) No se haya podido formalizar a través de un convenio y no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del propio Consorcio, que que no podrá reclamar más recursos que los finalmente previstos.

79. Están legitimados para interponer el recurso contencioso electoral o para oponerse a los que se interpongan:

a) Los candidatos proclamados o no proclamados.
b) Los representantes de las candidaturas concurrentes en la circunscripción.
c) Los partidos políticos, asociaciones, federaciones y coaliciones que hayan presentado candidaturas en la circunscripción.
d) Todas la respuestas son correctas

80. Si el Presidente no convocase el Pleno extraordinario solicitado por el número de concejales legalmente establecido dentro del plazo señalado, quedará automáticamente convocado:

a) Para el duodécimo día hábil siguiente al de la iniciación de dicho plazo, a las quince horas, lo que será notificado por el Secretario de la Corporación a todos los miembros de la misma al día siguiente de la finalización del plazo citado anteriormente.
b) Para el décimo día natural siguiente al de la finalización de dicho plazo, a las doce horas, lo que será notificado por el Secretario de la Corporación a todos los miembros de la misma al día siguiente de la finalización del plazo citado anteriormente.
c) Para el décimo día hábil siguiente al de la finalización de dicho plazo, a las doce horas, lo que será notificado por el Secretario de la Corporación a todos los miembros de la misma al día siguiente de la finalización del plazo citado anteriormente.
d) Para el vigésimo día hábil siguiente al de la iniciación de dicho plazo, a las quince horas, lo que será notificado por el Secretario de la Corporación a todos los miembros de la misma al día siguiente de la finalización del plazo citado anteriormente.

81. Según el art.187 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de haciendas locales, ¿Qué órgano es el competente para aprobar el plan de disposición de fondos?

a) Presidente.
b) Tesorero municipal.
c) Interventor municipal.
d) Secretario municipal.

82. ¿Cuál de los siguientes sujetos no tiene la obligación de aplicar la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local?

a) Una Mancomunidad con un presupuesto de 5.000.001€.
b) Un municipio con un presupuesto aprobado en equilibrio de 2.500.000€ con una población de 6.000 habitantes.
c) Una diputación provincial con un presupuesto aprobado de 40.000.000€.
d) Un municipio con un presupuesto aprobado en equilibrio de 2.750.000€ con una población de 4.000 habitantes.

83. ¿Qué requisitos se deben cumplir para poder aplicar el modelo simplificado de contabilidad pública local en base a la regla 1 de la Orden HAP/1782/2013?

a) Los municipios cuyo presupuesto no exceda de 500.000 euros, así como aquellos cuyo presupuesto supere este importe pero no exceda de 3.000.000 de euros y cuya población no supere 5.000 habitantes.
b) Los municipios cuyo presupuesto no exceda de 500.000 euros, así como aquellos cuyo presupuesto supere este importe pero no exceda de 3.000.000 de euros y cuya población no supere 10.000 habitantes.
c) Los municipios cuyo presupuesto no exceda de 300.000 euros, así como aquellos cuyo presupuesto supere este importe pero no exceda de 3.000.000 de euros y cuya población no supere 10.000 habitantes.
d) Los municipios cuyo presupuesto no exceda de 300.000 euros, así como aquellos cuyo presupuesto supere este importe pero no exceda de 3.000.000 de euros y cuya población no supere 5.000 habitantes.

84. Según el art.212.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de haciendas locales: "La cuenta general formada por la Intervención será sometida antes del día 1 ..... a informe de la Comisión Especial de Cuentas de la entidad local, que estará constituida por miembros de los distintos grupos políticos integrantes de la corporación":

a) 1 de junio
b) 1 de mayo
c) 1 de marzo
d) 1 de octubre

85. ¿En cuál de los siguientes casos el órgano competente para resolver las discrepancias es el pleno de la corporación en virtud del art.15 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local?

a) Cuando se aprecien graves irregularidades en la documentación justificativa del reconocimiento de la obligación o no se acredite suficientemente el derecho de su perceptor.
b) Cuando se hayan omitido requisitos o trámites que pudieran dar lugar a la nulidad del acto.
c) Se basen en insuficiencia o inadecuación de Crédito.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

86. ¿A cuál de los siguientes sujetos le es obligatorio la realización de una auditoria operativa en base al art.29 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local?

a) Organismo Autónomo local.
b) Sociedad Mercantil local.
c) Fundación local.
d) Ninguna respuesta anterior es correcta.

87. Según el art. 17 de la Ley 4/2004, de 2 de abril, de la Sindicatura de Cuentas de las Illes Balears, ¿cuál es la duración del mandato de los síndicos?

a) 6 años, sin posibilidad de reelección.
b) 6 años, con posibilidad de reelección.
c) 3 años, sin posibilidad de reelección.
d) 3 años, con posibilidad de reelección.

88. Según el art. 23 de la Ley 4/2004, de 2 de abril, de la Sindicatura de Cuentas de las Illes Balears, ¿qué órgano es el encargado de nombrar al síndico mayor?
a) El rey.
b)Presidente del gobierno de las Islas Baleares.
c)Presidente del Parlamento de las Islas Baleares.
d)Presidente del Tribunal de Cuentas.

89. ¿Qué afirmación es incorrecta en relación con las cantidades relativas a la responsabilidad de cuentas?

a) El órgano de la jurisdicción contable que conociere del asunto hará la determinación de la cuantía en resolución motivada una vez tenga los datos a que se refieren los párrafos anteriores, previa audiencia de las partes comparecidas por plazo no superior a diez días y sin que por ello se interrumpa el curso de los autos.
b) Contra la resolución que determine la cuantía no se dará recurso alguno, pero la parte disconforme podrá, en su día, fundar el de queja en su indebida fijación cuando, por razón del valor asignado, fuere rechazado cualquier recurso procedente con arreglo a lo establecido en esta Ley.
c) En los supuestos de acumulación, la cuantía vendrá determinada por la suma del valor de las pretensiones objeto de aquélla, sin que, no obstante, esta circunstancia comunique a las de cuantía inferior la posibilidad de recurso que, en su caso, proceda contra las de cuantía superior.
d) Para la determinación de la cuantía del procedimiento se atenderá al valor de la pretensión de responsabilidad contable que se ejercite o al importe de la fianza que se pretendiere cancelar.

90. En base al art.17.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de haciendas locales : "Las entidades locales publicarán, en todo caso, los anuncios de exposición en el boletín oficial de la provincia, o, en su caso, en el de la comunidad autónoma uniprovincial. Las diputaciones provinciales, los órganos de gobierno de las entidades supramunicipales y los ayuntamientos de población superior a ..... habitantes deberán publicarlos, además, en un diario de los de mayor difusión de la provincia, o de la comunidad autónoma uniprovincial":

a) 20.000
b) 5.000
c) 10.000
d) 50.000

91. ¿Qué órgano local es el competente para aprobar una modificación de la ordenanza fiscal sobre el tipo de gravamen del IBI en base a la legislación vigente?

a) Alcalde.
b) Pleno.
c) Junta de Gobierno Local.
d) Comisión especial de cuentas.

92. ¿Qué afirmación es correcta acerca del art.137 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local sobre el órgano encargado de resolver de las reclamaciones económico – administrativas?

a) Su funcionamiento se basará en criterios de independencia técnica, austeridad y transparencia.
b) Los miembros seran designados por el Pleno, con el voto favorable de la mayoría simple de los miembros que legalmente lo integren, de entre personas de reconocida competencia técnica.
c) La resolución que se dicte pone fin a la vía administrativa y contra ella sólo cabrá la interposición del recurso contencioso-administrativo.
d) Estará constituido por un número impar de miembros, con un mínimo de cinco.

93. ¿Cuál es el tipo de gravamen mínimo y supletorio de bienes inmuebles urbanos según el art. 72 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de haciendas locales?

a) 0,5%
b) 0,6%
c) 0,4%
d) 0,3%

94. El Impuesto sobre Actividades Económicas es un tributo..... de carácter ....., cuyo hecho imponible está constituido por el mero ejercicio, en territorio nacional, de actividades empresariales, profesionales o artísticas, se ejerzan o no en local determinado y se hallen o no especificadas en las tarifas del impuesto:

a) Indirecto – Personal.
b) Directo – Personal.
c) Directo – Real.
d) Indirecto – Real.

95. ¿Qué afirmación es incorrecta sobre el impuesto de vehículos de tracción mecánica?

a) Es un impuesto de carácter obligatorio.
b) Se puede exigir en régimen de autoliquidación.
c) El período impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso de primera adquisición de los vehículos.
d) El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo.

96. ¿Cuál es el tipo de gravamen máximo que se puede establecer en el impuesto sobre el incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana?
a) 20%
b) 30%
c) 25%
d) 12%

97. ¿Qué afirmación es correcta en relación con el art.53 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de haciendas locales sobre las operaciones de Crédito a largo plazo?

a) El importe de la anualidad teórica de amortización, de cada uno de los préstamos a largo plazo concertados y de los avalados por la corporación pendientes de reembolso, así como la de la operación proyectada, se determinará en todo caso, en términos constantes, incluyendo los intereses y la cuota anual de amortización, cualquiera que sea la modalidad y condiciones de cada operación.
b) En el ahorro neto se incluirán las obligaciones reconocidas, derivadas de modificaciones de créditos, que hayan sido financiadas con remanente líquido de tesorería.
c) Cuando el ahorro neto sea de signo negativo, el Pleno de la respectiva corporación deberá aprobar un plan de saneamiento financiero a realizar en un plazo no superior a cinco años, en el que se adopten medidas de gestión, tributarias, financieras y presupuestarias que permitan como mínimo ajustar a cero el ahorro neto negativo de la entidad, organismo autónomo o sociedad mercantil.
d) A estos efectos se entenderá por ahorro neto de las entidades locales y sus organismos autónomos de carácter administrativo la diferencia entre los derechos liquidados por los capítulos uno a cinco, ambos inclusive, del estado de ingresos, y de las obligaciones reconocidas por los capítulos uno, dos y tres del estado de gastos, minorada en el importe de una anualidad teórica de amortización de la operación proyectada y de cada uno de los préstamos y empréstitos propios y avalados a terceros pendientes de reembolso.

98. ¿A qué principio presupuestario hace referencia la siguiente afirmación? "No podrán adquirirse compromisos de gastos por cuantía superior al importe de los créditos autorizados en los estados de gastos, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos, resoluciones y actos administrativos que infrinjan la expresada norma, sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar":

a)Principio de anualidad.
b) Principio de especialidad cuantitativa.
c) Principio de no afectación.
d) Principio de proporcionalidad.

99. ¿En cuántos títulos se encuentra dividida la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria?

a) 10 títulos
b) 9 títulos
c) 8 títulos
d) 7 títulos

100. En virtud del plan general de contabilidad pública del año 2010, ¿Cuál es la definición de "importe recuperable"?

a) El importe recuperable es el importe de los flujos de efectivo a recibir o pagar en el curso normal de la actividad de la entidad, según se trate de un activo o de un pasivo, respectivamente, actualizados a un tipo de descuento adecuado.
b) El importe recuperable de un activo es el menor entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso.
c) El importe recuperable de un activo es el mayor entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso.
d) Ninguna respuesta anterior es correcta.

PREGUNTES DE RESERVA

101. Cuando concurren razones de interés público que lo aconsejan, la Administración acuerda la tramitación de urgencia de un procedimiento. Qué efectos produce esta decisión de acuerdo con el artículo 33 de la Ley 39/2015?

a) Reduce en la mitad todos los plazos del procedimiento, incluidos los de presentación de solicitudes y recursos.
b) Reduce en la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, excepto los relativos a la presentación de solicitudes y recursos; el acuerdo no es susceptible de recurso.
c) Reduce en un tercio los plazos de tramitación y exige siempre la petición previa de la persona interesada.
d) Permite prescindir de los trámites de audiencia y de prueba cuando el órgano instructor considere que hay urgencia suficiente.

102. Según el artículo 15.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en relación con el artículo 14.4 de la misma ley, la parte de los riesgos transferidos al concesionario:

a) Debe limitarse a la posibilidad de obtener un beneficio inferior al previsto, garantizándose la recuperación de las inversiones y la cobertura de los costes de explotación.
b) Debe suponer una exposición real a las incertidumbres del mercado que implique que cualquier pérdida potencial estimada en que incurra el concesionario no es meramente nominal o desdeñable.
c) Debe comprender necesariamente y de forma simultánea el riesgo de demanda y el riesgo de suministro, sin que resulte suficiente la transferencia de uno de ellos.
d) Debe referirse a las pérdidas derivadas del incumplimiento de sus obligaciones contractuales, siendo suficiente la posibilidad de imponerle penalidades durante la explotación.

103. Según el artículo 37.1 de la Ley 38/2003, general de subvenciones, qué periodo comprende el cálculo del interés de demora en el reintegro de una subvención por incumplimiento de la obligación de justificación?

a) Desde la fecha de concesión de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, o la fecha en que el deudor ingrese el reintegro si es anterior en esta.
b) Desde el día siguiente a la finalización del plazo de justificación hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, o la fecha en que el deudor ingrese el reintegro si es anterior en esta.
c) Desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que el deudor ingrese el reintegro, aunque sea posterior en la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro.
d) Desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, o la fecha en que el deudor ingrese el reintegro si es anterior en esta.

104. Las entidades locales gozan, respecto de sus bienes, de las siguientes prerrogativas:

a) La de recuperar por sí mismas su posesión en cualquier momento de los bienes patrimoniales.
b) La de recuperar por sí mismas su posesión en cualquier momento cuando se trate de los de dominio público y en el plazo de un año, los patrimoniales.
c) La de recuperar por sí mismas su posesión en el plazo de un año cuando de trate de bienes de domino público.
d) La de recuperar por sí mismas su posesión en el plazo de un año cuando de trate de bienes de domino público y patrimoniales.

105. ¿Qué afirmación es incorrecta sobre el domicilio fiscal del art.48 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria?

a) Los obligados tributarios deberán comunicar su domicilio fiscal y el cambio del mismo a la Administración tributaria que corresponda, en la forma y en los términos que se establezcan reglamentariamente.
b) Cada Administración podrá comprobar y rectificar el domicilio fiscal declarado por los obligados tributarios en relación con los tributos cuya gestión le competa con arreglo al procedimiento que se fije reglamentariamente.
c) Cuando no pueda determinarse el lugar del domicilio fiscal de acuerdo con los criterios anteriores prevalecerá aquel donde radique el mayor valor del efectivo líquido.
d) El domicilio fiscal es el lugar de localización del obligado tributario en sus relaciones con la Administración tributaria**.**